

Propuesta de Módulo

Apoyo al gobierno peruano en la gestión del proceso de vinculación con la OCDE (ViaOCDE)

Abreviaturas

AN	<i>Acuerdo Nacional</i> Nationale Vereinbarung
DGAECIP	<i>Dirección General de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional</i> Generaldirektion für Wirtschaftsangelegenheiten und internationale Zusammenarbeit
INDECOPI	<i>Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual</i> Nationales Institut für Wettbewerbsschutz und Schutz des geistigen Eigentums
INEI	<i>Instituto Nacional de Estadística e Informática</i> Nationales Institut für Statistik und Informatik
MEF	<i>Ministerio de Economía y Finanzas</i> Wirtschafts- und Finanzministerium
OCDE	<i>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos</i> Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PCM	<i>Presidencia del Consejo de Ministros</i> Amt des Ministerrats
PEDN	<i>Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050</i> Nationaler Entwicklungsplan
RREE	<i>Ministerio de Relaciones Exteriores</i> Außenministerium
SGP	<i>Secretaría General de Gestión Pública</i> Generalsekretariat für öffentliche Verwaltung
ST	<i>Secretaría Técnica de la Comisión OCDE-Perú</i> Technisches Sekretariat der OECD-Peru-Kommission

1 Breve descripción

Título del módulo	Apoyo al gobierno peruano en la gestión del proceso de adhesión a la OCDE (ViaOCDE)
Objetivo del módulo	Los actores estatales seleccionados son capaces de implementar estratégicamente el proceso de adhesión a la OCDE
Contribución a la implementación nacional de la Agenda 2030	Plan Estratégico Nacional de Desarrollo (PEDN) con aportes al ODS 16.6 (Instituciones eficaces), ODS 16.7 (Toma de decisiones participativa) y ODS 5.c (Igualdad de género)
Grupo objetivo	Personal técnico y directivo de instituciones estatales seleccionadas a través de las cuales se impacta en la población en general
Actor político responsable	Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Económicos)
Enfoque metodológico (incl. instrumentos)	Desarrollo organizacional y de capacidades de instituciones estatales, asesoramiento técnico y metodológico para la implementación de reformas priorizadas y fomento de enfoques de múltiples partes interesadas (Multi-Stakeholder).
Principales outputs	(1) Condiciones técnicas para la gestión del proceso de adhesión a la OCDE; (2) Condiciones institucionales para una implementación coherente y basada en evidencia de las recomendaciones de la OCDE; (3) Implementación participativa de reformas seleccionadas
Duración	Desde 02/2026 hasta 01/2030 (4 años)

2 Contexto

Contexto inicial en el área de intervención: En reconocimiento a los esfuerzos de larga data por alinear la acción estatal con estándares internacionales, los Estados miembros de la OCDE invitaron a Perú en 2022 a iniciar el proceso de adhesión a la organización. En junio de 2022 la OCDE elaboró una hoja de ruta que describe los requisitos del proceso de adhesión. Según esta hoja de ruta, 24 comités técnicos de la OCDE llevarán a cabo una evaluación exhaustiva de la legislación y las prácticas peruanas en todos los ámbitos de política, evaluarán el grado de alineación de Perú con un total de 240 instrumentos jurídicos de la OCDE y posteriormente emitirán recomendaciones para acercarse a los estándares de la organización. Las recomendaciones de la OCDE deberán implementarse mediante marcos jurídicos, estrategias políticas y procedimientos institucionales adaptados o perfeccionados.

Las necesidades de reforma abarcan, entre otros aspectos, la reducción de las desigualdades socio-territoriales, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento de la competitividad. Las disparidades regionales se reflejan especialmente en el acceso a infraestructuras y servicios básicos, así como en la baja competitividad de las regiones. Estas disparidades son consecuencia directa de una transferencia incompleta de competencias financieras a las administraciones subnacionales. La informalidad laboral sigue siendo alta en comparación con la región, alcanzando un 71 %. Se requieren esfuerzos adicionales para reducir las barreras burocráticas y mejorar el acceso a los sistemas de protección social. Según

estimaciones de la Contraloría General de la República del Perú, las pérdidas ocasionadas por la corrupción provocan una disminución anual del rendimiento económico de aproximadamente el 3 % del producto bruto interno.

También se requieren reformas para fortalecer la formulación de políticas basadas en evidencias, mejorar las estructuras administrativas orientadas a la ciudadanía y fomentar la participación pública. Además de la implementación de reformas a mediano plazo en estos ámbitos, el Perú asume la gestión de su proceso de adhesión, lo cual requiere una coordinación a nivel de todo el gobierno. La instancia principal encargada de dirigir este proceso es la Comisión Multisectorial Perú-OCDE, creada en 2023, compuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). La coordinación institucional está a cargo de una Secretaría Técnica (ST), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. 42 representantes de ministerios y entidades públicas (los denominados “responsables sectoriales”) están encargados de la coordinación técnico-sectorial y de coordinar la implementación de las reformas. Una comisión especial establecida en el poder legislativo supervisa el proceso de adhesión a la OCDE.

Derivación del objetivo del módulo: El proceso de adhesión de Perú a la OCDE comprende, por un lado, la gestión de todo el proceso, lo cual implica la necesidad de una coordinación intra- e interinstitucional, sistemas de gestión del conocimiento y de monitoreo, así como procedimientos estandarizados y con garantía de calidad. Por otro lado, el proceso de adhesión exige la implementación estratégica de reformas, lo cual requiere una estrecha coordinación en todos los niveles de la administración pública. La participación del sector privado y de la sociedad civil es decisiva para fortalecer la legitimidad y la viabilidad de las medidas de reforma. El módulo actúa directamente sobre las mejoras necesarias en las condiciones técnicas e institucionales de las entidades centrales del gobierno, tanto para la gestión del proceso de adhesión como para la implementación de medidas de reforma derivadas de las recomendaciones de la OCDE en los ámbitos que sean prioritarios.

3 Objetivos, indicadores y socios del módulo

3.1 Objetivos, grupo destinatario, hipótesis de impacto e indicadores

Objetivo del módulo:

Actores estatales seleccionados están en condiciones de implementar estratégicamente el proceso de adhesión a la OCDE.

Indicadores:

1. Cantidad de responsables sectoriales que confirman el uso de metodologías recientemente desarrolladas para la gestión del proceso de adhesión a la OCDE.
Valor base: 2 de 42 responsables sectoriales (2025)
Valor objetivo: 22 de 42 responsables sectoriales (2029)
2. Número de recomendaciones de la OCDE en las áreas estratégicas a reformar que han sido implementadas por las instituciones centrales del gobierno.

Valor base: 1 recomendación de la OCDE (2025)

Valor objetivo: 4 recomendaciones de la OCDE (2029)

3. Número de medidas de reformas implementadas que incluyen recomendaciones de actores no estatales.

Valor base: 0 (2025) (los actores no estatales no participan en la implementación de medidas de reforma)

Valor objetivo: 3 medidas de reforma (2029), una de ellas en el ámbito del desarrollo territorial.

Los valores de referencia y meta de los indicadores 1, 2 y 3 son provisionales. Serán revisados durante el primer año de implementación y, en su caso, ajustados en el marco del primer informe de seguimiento.

El **grupo destinatario del proyecto** abarca a toda la población del Perú, que actualmente asciende a aproximadamente 33 millones de personas y que, a largo plazo, se beneficiará de las reformas y de estructuras de gobernanza mejoradas. Perú es un país con importantes desafíos sociales y económicos. En el año 2022, el 27,5 % de la población vivía por debajo de la línea nacional de pobreza, lo que corresponde a unos 9,1 millones de personas. Esto representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. La desigualdad de ingresos sigue siendo un reto: el coeficiente de Gini del país fue de 0,43 en 2021. La desventaja socioeconómica afecta especialmente a mujeres, poblaciones indígenas y comunidades rurales, que a menudo tienen un acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los recursos económicos. También existen desigualdades en la participación política: las mujeres y los grupos marginados están subrepresentados en los procesos de toma de decisiones, y los mecanismos de participación de la sociedad civil funcionan de manera limitada debido a tensiones políticas y barreras institucionales. En cuanto a las desigualdades de género, Perú ocupa el puesto 87 de 170 países en el Índice de Desigualdad de Género de 2021 (*Gender Inequality Index*), con un valor de 0,391. Además, la corrupción afecta negativamente la confianza en las estructuras estatales y la eficacia de las medidas gubernamentales.

El proyecto interactúa con los cuadros técnicos y directivos de las instituciones centrales del gobierno responsables de la conducción e implementación del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, en particular del Secretariado Técnico (ST) de la Comisión Perú-OCDE, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la PCM, se colabora con la Secretaría de Gestión Pública (SGP). En el MEF, el proyecto apoya a la Dirección General de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional (DGAE-CIP). Estas unidades desempeñan un papel central en la implementación de reformas y la coordinación de los procesos técnicos y políticos en el marco de adhesión a la OCDE. Asimismo, los 42 responsables sectoriales tienen un rol clave ya que trabajan en diversos ministerios e instituciones públicas y son responsables de la alineación temática de los respectivos sectores de reforma con los estándares de la OCDE.

3.2 Responsable político y estructura de socios

El **socio político** es la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se encuentra la Secretaría Técnica de la Comisión Perú-OCDE.

La ST (Secretaría Técnica) es responsable de la coordinación del proceso de adhesión. Actúa como un punto de enlace entre los diferentes ministerios sectoriales, instituciones estatales, la sociedad civil y los socios internacionales. Asimismo, le corresponde a la ST fortalecer el rol de los responsables sectoriales. Para ello, la ST debe brindar acompañamiento metodológico a los responsables sectoriales en el desarrollo del proceso de adhesión en su respectivo ámbito sectorial (por ejemplo, para proporcionar información a los comités técnicos relevantes, elaborar informes técnicos, organizar misiones de evaluación de la OCDE y preparar planes de acción). La ST también apoya a la Alta Representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en las áreas de coordinación política, incidencia y monitoreo del proceso. El módulo aportará a reforzar sus capacidades técnicas y metodológicas para coordinar plenamente los exigentes requerimientos del proceso de adhesión a la OCDE.

Los principales socios de implementación son la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estas instituciones desempeñan un papel clave tanto en la coordinación general del proceso de adhesión como en la planificación, coordinación e implementación de las reformas necesarias en el marco de dicho proceso. La PCM y el MEF son conjuntamente responsables de 16 de los 24 comités técnicos, lo que les permite aportar una perspectiva política integral y así contribuir a un proceso coherente. La PCM cumple una función clave en la coordinación política entre las instituciones estatales, tanto a nivel horizontal (entre ministerios sectoriales) como a nivel vertical (entre los diferentes niveles de gobierno). El MEF, por su parte, es responsable de la implementación de reformas fiscales y tributarias, así como de la gobernanza económica. Ambas instituciones requieren realizar un trabajo coordinado, para garantizar la eficacia de la implementación de las reformas.

Otros actores que se prevé incluir como socios de implementación en medidas específicas son el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), así como el Acuerdo Nacional (AN). El AN es un foro clave en el Perú, creado en 2002 con el objetivo de fomentar la estabilidad política, social y económica. Reúne a representantes del gobierno, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otros actores relevantes. Su finalidad es promover un diálogo multipartidario y definir e implementar objetivos de desarrollo nacional a largo plazo. El INEI presenta principalmente necesidades en relación con la territorialización de los sistemas nacionales de datos. En este ámbito, el proyecto puede brindar asesoría técnica especializada. INDECOPI, como entidad pública responsable de promover y regular la competencia, proteger los derechos de los consumidores y fomentar la propiedad intelectual, desempeña un papel importante en la garantía de un mercado justo y competitivo en el país. En el caso de INDECOPI, se ha identificado la necesidad de asistencia técnica para fortalecer la institución en la reducción de barreras burocráticas.

4 Diseño del módulo

4.1 Enfoque metodológico y duración

Duración: de 02/2026 a 01/2030 (4 años)

Estrategia: El proyecto requiere un alto grado de flexibilidad, ya que el proceso de adhesión a la OCDE es dinámico y su cronograma se va adecuando en función a los avances del

propio proceso. La estrategia apunta a apoyar el proceso de adhesión mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales e individuales, la promoción de procesos participativos, así como el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Dado que uno de los mayores desafíos consiste en la territorialización de las reformas necesarias derivadas de las recomendaciones de la OCDE, se pondrá especial énfasis en una coordinación eficaz con las instituciones regionales y locales en el marco de un enfoque multinivel. Aunque el módulo está centrado en la cooperación con el gobierno nacional, mediante el fortalecimiento de las funciones de coordinación y dirección de instituciones centrales del gobierno —PCM y MEF— y mediante foros de intercambio con participación de los gobiernos subnacionales, se garantizará que las reformas tengan un impacto territorial.

La operacionalización de las recomendaciones formuladas por la OCDE abarca posibles ajustes a nivel normativo, el desarrollo o la actualización de políticas, así como la optimización de los procedimientos institucionales. Para ello, el proyecto proporciona asesoría especializada, con el fin de identificar instrumentos adecuados que se ajusten al marco político e institucional del Perú. Además, el proyecto reforzará las capacidades de ambas instituciones en su relación con actores clave de la sociedad civil y del sector privado.

El Output 1 tiene como objetivo reforzar las capacidades de la ST para la gestión del proceso de adhesión a la OCDE. Una línea importante de actividades es el apoyo a un sistema integral de monitoreo. Asimismo, se fortalecerá el seguimiento de los avances en las medidas de reforma para acompañar la implementación de los ajustes requeridos en el proceso de adhesión. También se promoverá la institucionalización de espacios para compartir buenas prácticas y metodologías de gestión de procesos (entre países, entre comités, entre instituciones).

El Output 2 tiene como objetivo fortalecer las condiciones institucionales de las principales instituciones centrales del gobierno —la PCM y el MEF— para una implementación coherente, con perspectiva de igualdad de género y basada en evidencia de las recomendaciones de la OCDE. En coordinación con los socios, la asesoría se centrará en ocho áreas prioritarias de reforma: estadísticas; desarrollo territorial; política regulatoria; administración digital; gobernanza pública; lucha contra la corrupción; política de formalización y de competencia; y finanzas públicas. En estos ámbitos, la PCM y el MEF recibirán apoyo técnico y metodológico específico para priorizar medidas con alto potencial de impacto y coordinar su implementación. Con este fin, se desarrollarán mecanismos para fortalecer los procesos de coordinación dentro de cada institución, así como entre ambas lo que incluirá, entre otras, la creación de grupos de trabajo conjuntos y la elaboración de procedimientos estandarizados de coordinación para institucionalizar la colaboración. Asimismo, se fomentará el desarrollo y uso de instrumentos de formulación de políticas basadas en evidencia.

Output 3 tiene como objetivo que la implementación de reformas estratégicas seleccionadas se diseñe de forma participativa y adopte un enfoque multinivel. Para ello, junto con los socios, se realizará primero una selección de reformas estratégicamente importantes en las ocho áreas prioritarias mencionadas anteriormente. Las instituciones centrales del gobierno recibirán apoyo para convocar y diseñar foros de múltiples partes interesadas, con el fin de fomentar un diálogo inclusivo entre actores estatales, la sociedad civil y el sector privado. Estos foros servirán como plataforma para el intercambio de perspectivas y el desarrollo

conjunto de medidas de reforma. El diseño participativo de los procesos de reforma se apoyará mediante asesoría dirigida a determinados/as profesionales y directivos/as de las instituciones centrales del gobierno, así como mediante talleres. De este modo, se garantizará que todos los actores relevantes estén involucrados y puedan aportar su experiencia. Asimismo, se pondrá especial énfasis en el diseño con perspectiva de igualdad de género de los formatos de diálogo. También se apoyará el desarrollo adicional de la plataforma digital nacional para la consulta pública, con el objetivo de que las propuestas elaboradas por el gobierno sobre medidas de reforma sean sometidas a consulta pública.